

MISION PERMANENTE DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
GINEBRA

II.2.S 20.D.ONU.1
N° 176

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales, saluda atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en la oportunidad de referirse a la comunicación S/N, de fecha 03 de mayo de 2012, referida a la aplicación de la Resolución A/RES/66/160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; por medio de la cual la Oficina solicitó cualquier información sobre la aplicación de la referida Resolución, a los fines del informe a presentar por el Secretario General sobre su implementación. Al respecto, habida cuenta del corto lapso disponible para recabar la información pertinente, mucho agradecemos a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se sirva dar tramitación a la contestación de la mencionada solicitud; mediante la cual Estado venezolano responde a la cuestión en estudio, con base en la información recabada por la Oficina de Asuntos Multilaterales y de Integración del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Esta Misión Permanente queda a la entera disposición de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los fines de dar ulteriores informaciones que pudieran surgir sobre el particular.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales, hace propicia la ocasión para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las seguridades de su más alta estima y distinguida consideración.

OHCHR REGISTRY

25 JUL 2012

Recipients: CEP



Ginebra, 23 de julio de 2012.

A la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Ginebra – Suiza

Anexo: Lo indicado

DESPACHO DEL MINISTRO/ OFICINA DE ASUNTOS MULTILATERALES Y DE INTEGRACION

**República Bolivariana de Venezuela
Consejo de Derechos Humanos****Aplicación de la resolución A/RES/66/160, titulada “Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”**

La República Bolivariana de Venezuela se encuentra realizando todas las gestiones pertinentes a fin de llevar a cabo la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

En este sentido se precisa que la legislación nacional venezolana exige que, para que la República se adhiera o ratifique un tratado internacional, se debe realizar un proceso de consultas internas entre los órganos gubernamentales competentes por la materia objeto del tratado, a fin de determinar la conveniencia para el Estado venezolano de asumir las obligaciones internacionales que se derivarían de dicho tratado.

En este sentido cabe señalar que, a objeto de determinar la factibilidad de que la República Bolivariana de Venezuela ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores ha solicitado la opinión de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y Justicia, de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República, habiéndose recibido la mayoría de los comentarios de dichos organismos.

Igualmente, se han incorporado algunos cambios en la legislación penal venezolana, a fin de garantizar la aplicación tanto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual fue ratificada el 19 de enero de 1999, como de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.

Cabe destacar que con relación a las medidas adoptadas para considerar la opción que se establece en los artículos 31 y 32 de la Convención, referidos a la posibilidad de que cada Estado parte reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar directamente comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción, la Procuraduría General de la República, máximo órgano asesor del Estado venezolano en materia jurídica, se encuentra a realizando un examen a profundidad sobre dichos artículos, a fin de determinar la conveniencia de efectuar la correspondiente declaración a tal efecto.